

---

## LA VISIÓN GENERAL

*Lorenzo Meyer*

### El hilo conductor: cambio y resistencia

“Hay, pese a todo, un contexto real para algunas de las [razones de las] protestas de los estudiantes, cuyos esfuerzos son un signo más que advierte que ya quedaron en el pasado los mejores tiempos del tan pregonado progreso y del genio mexicano para mantener la estabilidad.” El párrafo anterior no está tomado de un crítico del sistema político mexicano sino de un informe especial y secreto, fechado el 17 de enero de 1969, elaborado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Su título: “Desafíos al partido único de México”<sup>1</sup> refleja bien la problemática de la coyuntura desde la perspectiva estadounidense y de la clase política mexicana.

En la atmósfera creada por la guerra fría, Gustavo Díaz Ordaz intentó explicar y justificar los problemas y los actos de su gobierno ante la crisis y la tragedia políticas que se desarrollaron en México entre julio y octubre de 1968, como inevitables, justas y necesarias acciones del Estado frente a una conspiración del comunismo internacional. Sin embargo, el análisis frío de los profesionales del anticomunismo mundial —los servicios de inteligencia política de la gran potencia, en cuyo círculo de influencia estaba México— concluyó algo muy distinto: que las causas fundamentales de lo sucedido tres meses atrás en la ciudad de México eran internas, y que en realidad el proceso político al sur del río Bravo acababa de experimentar un cambio cualitativo. La CIA no se equivocaba, y alcanzó a ver lo que una buena parte de las clases gobernantes mexicanas se negaron a aceptar entonces y durante un buen tiempo después: que una etapa del proceso histórico del país había concluido y otra acababa de iniciarse.

El tiempo transcurrido permite ver de manera cada vez más clara que en el desarrollo político del siglo XX mexicano, 1968 fue uno de esos años que pueden calificarse como de inflexión, es decir, un momento en que ciertos desarrollos y tendencias concluyen o se modifican de manera sustantiva y otros más se inician. El resultado final es que el conjunto cambia de dirección.

La movilización independiente, básicamente pacífica pero con elementos de acción directa y violenta, a veces festiva e insolente, pero siempre antiautoritaria, que fue el movimiento estudiantil de ese año —surgido de la voluntad y acción de un sector de la clase media urbana, es decir, una minoría dentro de la minoría—, puso en duda la legitimidad del orden existente de un modo un tanto desordenado e insólito, pero radical y efectivo. La cúpula dirigente y sus aliados del mundo económico, cultural y religioso, consideraron ese cuestionamiento al statu quo y a la estructura de poder existente —ambos aparentemente muy sólidos— como un desafío intolerable por peligroso. En efecto, las diferentes elites que controlaban y dirigían el ritmo de la

vida mexicana al inicio de la segunda mitad del siglo XX, consideraron que el desorden político en los campus universitarios y, sobre todo, en las calles, era un reto no sólo al presidente sino a toda la estructura de poder, autoridad y privilegios. Y es que el “movimiento del 68” era, efectivamente, un desafío y una negación de la legitimidad, no del orden formal sino del orden real: del sistema autoritario existente en México, que no era otra cosa que el resultado natural, casi inevitable, de la consolidación y evolución del proyecto y los intereses de la facción vencedora en la revolución que se iniciara en 1910 en nombre de una democracia política pero que, finalmente, cristalizó en un orden basado en un partido de Estado que monopolizó el poder por más de siete décadas. Y, para sostenerse, ese orden exigía que ningún actor o fuerza política significativa pudiera organizarse y actuar de manera independiente, que era justamente lo que pretendían los estudiantes.

A la luz de los hechos y procesos posteriores, la brutal e indiscriminada represión por parte del ejército y de la policía de una protesta pacífica de los estudiantes en la plaza de un gran conjunto habitacional construido por el gobierno en el histórico barrio de Tlatelolco, en la ciudad de México, la tarde del 2 de octubre, puede interpretarse como el trágico inicio de la etapa final del régimen posrevolucionario. Lo acontecido y sus largas secuelas mostraron que si por un lado el sistema político, centrado en una presidencia todopoderosa y en un partido hegemónico y corporativo, mantenía su fuerza y cohesión, por el otro carecía de la voluntad y de los medios para recoger y procesar las demandas de grupos y fuerzas independientes de su vieja estructura de control, tal y como se suponía que debía ocurrir en una democracia moderna. Entonces y después, en la imaginación y la conducta de un buen número de mexicanos, el movimiento del 68 actuó como catalizador de procesos de cambio que venían gestándose hacia tiempo. De cara al futuro, la represión masiva e indiscriminada de Tlatelolco —los muertos se calculan en un centenar— se convirtió en un punto de referencia, en un antes y un después político y cultural de México.<sup>2</sup>

Los sucesos de aquel sorprendente otoño de 1968 —momento en que arranca esta historia y esta visión del México contemporáneo— mostraron de manera palmaria que en la agenda de las clases dominantes mexicanas estaba acelerar la transformación material del país —quemar “las etapas del desarrollo” hasta alcanzar una industrialización que permitiera dar un salto cualitativo y dejar atrás el subdesarrollo económico—, no así el cambio político, la democratización del régimen. El crecimiento material (7% anual, en promedio, del PIB) era la fuente principal e insustituible de una legitimidad pragmática que no pretendía el cambio integral, la verdadera modernización, pues ese cambio implicaba la redistribución del poder hacia abajo, hacia la base, por la vía de la democratización política. Sin embargo, la evolución de la sociedad mexicana en las tres décadas siguientes —proceso que constituye el tema central de estos volúmenes— y las transformaciones en el entorno mundial que la acompañaron, empujaron hacia la crisis definitiva del modelo económico adoptado por el gobierno a partir de la segunda guerra mundial. A su vez, esa crisis, que se hizo patente en 1982, llevó a una aguda y evidente contradicción entre las formas de gobernar heredadas —propias de un régimen basado en elecciones sin contenido y en el control corporativo de la sociedad por una presidencia fuerte y centralista— y las exigencias de una sociedad cada vez más urbana, educada e informada, con una estructura de clase polarizada y que demandaba nuevos y mejores canales de participación. Tal combinación hizo que al final de la década de 1980 resurgiera la crisis política acallada el 2 de octubre

de 1968 y fuera necesario darle una solución constructiva. Desde luego, y como se verá a lo largo de la obra, esa evolución del último tercio del siglo XX mexicano estuvo llena de contradicciones, avances y retrocesos, y enmarcada por algunos incidentes violentos. Su desenlace —la transformación del régimen político en el año 2000 por vía pacífica y electoral— pudo haber ocurrido de otra manera, pero en cualquier caso, mientras ciertos elementos de la lógica política, social y económica empujaron hacia un crecimiento y robustecimiento del pluralismo mexicano y a la emergencia de más y más ciudadanos, otros, como los intereses creados por la clase política, sus aliados y las instituciones que servían a esos intereses, así como el conflicto internacional entre el Este y el Oeste, actuaron en sentido contrario: como frenos a la aparición, manifestación y desarrollo de la sociedad civil y de su pluralismo político. Es justamente la contradicción y el choque entre esas tendencias en favor del cambio o la resistencia lo que constituye el meollo de las diferentes narraciones particulares que se hallan en esta obra y la esencia del proceso histórico mexicano en el último tercio del siglo XX. Un proceso en que poco a poco se fue disipando la tupida sombra que por más de medio siglo había proyectado el otrora frondoso árbol de la Revolución mexicana sobre casi todos los campos de la trama social del país.

### **El contexto amplio. Del mundo bipolar al mundo unipolar**

En 1968 el conflicto generado por el choque entre los bloques del Este y del Oeste, entre socialismo y capitalismo, se mantenía como eje de los procesos más significativos en el contexto internacional. Sin embargo, y justo es decirlo, se trataba de una bipolaridad menos tensa que la que imperó en las dos décadas anteriores. En efecto, en ese año pudo firmarse un Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y aunque la competencia entre los dos grandes bloques y sistemas se mantenía y se expresaba en casi todos los ámbitos y niveles, tanto en la tierra como en el espacio, la posibilidad de una tercera guerra mundial fue disminuyendo a grandes pasos.

El lado más espectacular y constructivo de la lucha entre capitalismo y socialismo desbordó el planeta. Mientras Estados Unidos lanzaba en 1968 a sus astronautas en las naves Apolo (7 y 8) y mandaba un vehículo a la Luna (Surveyor 7), la Unión Soviética lograba acoplar por primera vez dos satélites que orbitaban la Tierra. Un año más tarde, astronautas estadounidenses pisaron la superficie de la Luna (“es un pequeño paso para un hombre —diría Neil Armstrong el 20 de julio de 1969—, pero gigante para la humanidad”). Sin embargo, la verdadera lucha, la que influía directa e inmediatamente en la vida de miles de millones de habitantes del planeta, seguía firmemente plantada en tierra, y en muchos casos mantenía un carácter tan elemental como violento.

En ese 1968, la energía política estadounidense se concentraba en lograr un triunfo militar en un teatro de operaciones situado al otro lado del mundo, en Vietnam, donde medio millón de efectivos de su moderna fuerza armada chocaban con una guerrilla comunista —el Frente Nacional de Liberación o Vietcong— particularmente nacionalista y apoyada por China. Era un conflicto heredado del colonialismo francés que había dejado a la antigua Indochina dividida en dos: Vietnam del Sur, ligado a Occidente, y Vietnam del Norte, integrado al bloque socialista. En Estados Unidos, las tensiones provocadas por la costosa intervención militar en apoyo al notablemente corrupto régimen de Vietnam del Sur se agudizaron a partir de ene-

ro de 1968, cuando en Vietnam la fiesta del “Tet” sirvió para que el Vietcong lanzara una ofensiva general que si bien fue detenida, mostró cuán lejos estaban Estados Unidos y sus aliados de derrotar al adversario. Como resultado político de aquella ofensiva, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson desistió de buscar la reelección y puso la intervención en Asia en el centro de la agenda electoral. La victoria en las urnas por un escaso margen del republicano Richard Nixon sobre el demócrata Hubert Humphrey, estuvo enmarcada por el compromiso de poner fin a la presencia militar en Vietnam, pero aún correría mucha sangre antes de que llegara, en 1973, el momento de la evacuación estadounidense y la caída de Vietnam del Sur en manos de los comunistas, al igual que Laos y Camboya. Pero no todas las tensiones internas que afectaban entonces a Estados Unidos se explicaban por la llamada guerra fría; el asesinato del líder de la lucha contra la discriminación racial y premio Nobel de la paz, Martin Luther King, y en cierta medida el del senador Robert Kennedy, precandidato del Partido Demócrata, mostraron cuán profundas eran las divisiones raciales e ideológicas en la gran potencia de Occidente.

En el otro polo del sistema internacional también había problemas muy serios, como lo mostró la invasión soviética de Checoslovaquia, que culminó con el derrocamiento y arresto del líder reformista del Partido Comunista Checoslovaco, Alexander Dubcek, quien encabezó un breve pero fascinante intento por hacer brotar de las cenizas del estalinismo “la vía checoslovaca al socialismo”. Se trataba de dar forma a un socialismo diferente: nuevo, flexible, con rasgos democráticos y “rostro humano”. Al final, la llamada “Primavera de Praga” —libertad de prensa, independencia del poder judicial, tolerancia religiosa— resultó un intento prematuro, fallido y trágico. Sin embargo, las razones que dieron origen a la apertura checa no desaparecieron, al contrario, terminaron por dar lugar a un proceso más complejo de cambio que veinte años después desembocó en la gran crisis final —implosión— del bloque soviético y de la misma Unión Soviética; pero no adelantemos los acontecimientos y continuemos con el hilo histórico.

En los campus universitarios y las calles de un buen número de ciudades en varias partes del globo, los estudiantes más radicales —la llamada “Nueva Izquierda”— se movilizaron, organizaron, criticaron y enfrentaron a las autoridades y a los sectores más conservadores de sus sociedades. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos que en la Francia de la Quinta República gobernada por el general Charles de Gaulle, héroe de la segunda guerra mundial, en la España franquista, Alemania Occidental, Italia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Japón, Gran Bretaña, Brasil, Uruguay y, desde luego, México. Esos estudiantes inconformes cuestionaban con más imaginación que instrumentos reales de poder, no sólo sus respectivas estructuras formales de autoridad y políticas específicas, sino sobre todo un modo de vida y una tabla de valores a los que calificaban de autoritarios, mezquinos —consumistas— y culpables de los conflictos bélicos, de la discriminación racial y de las múltiples injusticias sociales que se observaban tanto en los países ricos como en los que formaban la ancha periferia del sistema mundial. El movimiento estudiantil mexicano, por tanto, tuvo en este proceso mundial tanto un marco como un punto de referencia inevitables.

Al final, los movimientos juveniles libertarios del 68 fueron derrotados, pero la energía política y cultural que generaron, la imaginación despertada en ese proceso, no se disipó ni se perdió, al menos no del todo, pues los valores alternativos —antiautoritarios, pacifistas, comunitarios y solidarios— enarbolados por las minorías disidentes terminaron por influir en capas sociales más amplias, tanto por la vía de la política como de la música, la literatura, los filmes, el teatro, la forma de vestir, las prácticas sexuales, etcétera. La minoría disidente, crítica,

más notoria, estaba en las universidades o en los círculos de la contracultura, pero no sólo ahí. La iglesia católica latinoamericana, por ejemplo, también fue tocada por la fuerza del cambio, y la Segunda Conferencia Episcopal celebrada en Medellín, Colombia, vio nacer a otra minoría radical —esta vez de sacerdotes— que terminaría de reconocerse y agruparse en torno a la llamada “teología de la liberación”, una visión del mundo y una interpretación de los evangelios que demandaba el compromiso con los pobres de la Tierra. Ese radicalismo teológico, combatido lo mismo por los gobiernos que por la mayoría conservadora de los obispos, dejaría huella. En el caso mexicano, el ejemplo más importante de los efectos de este catolicismo tuvo lugar en Chiapas, concretamente en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, y entre las comunidades indígenas, pero eso se hizo evidente mucho más adelante, en los años ochenta y noventa, cuando se encontró, en las montañas del sureste, con los remanentes de la izquierda del 68 y dio lugar a una rebelión indígena impregnada de valores universales; pero, otra vez, no adelantemos el tiempo histórico.

Inmediatamente después de la masacre de Tlatelolco, se llevaron a cabo en México los juegos olímpicos sin que los responsables políticos de los 125 países que participaron pusieran reparo alguno. Ninguno de los más de 6,500 participantes consideró que la represión política mexicana fuera asunto a mezclar con los juegos (en contraste, la siguiente olimpiada, celebrada en Munich, estuvo cargada de elementos políticos). Esa actitud se puede explicar por la atmósfera anticomunista y de guerra fría predominante entonces en el mundo. Estados Unidos y Europa occidental no deseaban poner en entredicho a un gobierno y a un sistema que mantenía una rara estabilidad en América Latina. Por su parte, la Unión Soviética, China, Cuba y el resto de los países socialistas no deseaban enturbiar sus relaciones con el gobierno mexicano. Ese gobierno se caracterizaba por un anticomunismo claro pero discreto, que por un lado acusaba al “comunismo internacional” de fomentar el desorden y la rebelión internos, pero por el otro, y en nombre de la autodeterminación y la no-intervención, se negaba a aislar a la Cuba socialista y permitía, por la vía de las embajadas, que los gobiernos de los países socialistas mantuvieran cierta presencia en la frontera con Estados Unidos.

En los años setenta, a la vez que la guerra de Vietnam concluyó con la derrota estadounidense en un teatro político periférico, se llevaron a cabo las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética para acordar una limitación de sus armas estratégicas (SALT)\* a fin de mantener el equilibrio militar —equilibrio del terror— entre las superpotencias. Para entonces el bloque socialista se había dividido definitivamente en dos, al punto que las antiguas aliadas, China y la Unión Soviética, llegaron al choque en 1969 en su frontera del río Ussuri. De esta manera, a la pugna original Este-Oeste se añadía la chino-soviética. El sistema internacional parecía marchar rumbo a la multipolaridad.

La guerra fría nunca se convirtió en una confrontación directa entre las superpotencias ni entre las potencias atómicas secundarias: Gran Bretaña, Francia, China, India, Pakistán y, quizá, Israel. Sin embargo, la confrontación indirecta entre las dos grandes fue constante y se reflejó en situaciones como el conflicto árabe-israelí en el Cercano Oriente (la guerra del Yom

\* Las Strategic Arms Limitation Talks o SALT dieron por resultado dos acuerdos en 1972 y 1979, respectivamente, en virtud de los cuales Estados Unidos y la Unión Soviética limitaron la producción de misiles nucleares estratégicos.

Kippur que enfrentó a Israel con Egipto y Siria estalló en 1973); en guerras civiles como las de Líbano, Angola o Camboya; en el apoyo estadounidense al golpe militar en Chile contra el gobierno socialista de Salvador Allende, así como a otros movimientos castrenses en Latinoamérica, o en un apoyo similar de la Unión Soviética a varios gobiernos de Asia y África.

Por otro lado, la caída de la vieja dictadura de Portugal, en 1974, y la muerte del general Francisco Franco en España, en 1975, iniciaron de manera un tanto modesta lo que más tarde se conocería como “la Tercera Ola Democrática”, que se expandiría por América Latina y partes de Asia y África para luego extenderse a Europa del este y a la propia Unión Soviética, hasta llegar finalmente a México.<sup>3</sup> Por otro lado, dentro del mundo capitalista, siguió adelante el proceso de formar bloques económicos. El más exitoso resultó ser la Comunidad Europea, que se inició en 1952 como Comunidad Europea del Carbón y el Acero, cinco años después se transformó en el Mercado Común Europeo y una década más tarde, en 1967, había evolucionado hasta convertirse en la Comunidad Europea, para transformarse, en 1993, en la Unión Europea (UE); una asociación económica, jurídica y política de quince países que, en vísperas de concluir el siglo, adoptó una moneda única, con todo lo que ello implicaba en materia de soberanía y coordinación política. En contraste, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), formada en los años sesenta, se quedó estancada, pero más adelante se integrarían en Asia y América otros agrupamientos económicos que tendrían mayor sustancia, aunque sin obtener el gran calado de la UE.

El proceso de globalización, sello de identidad del final del siglo XX, fue resultado de dos evoluciones convergentes: En primer lugar, el triunfo en los años setenta, primero en Gran Bretaña y después en Estados Unidos, de sendas corrientes políticas dispuestas a dismantelar al “Estado Benefactor” que había florecido en el mundo capitalista a partir del fin de la segunda guerra mundial. Se trataba de disminuir el papel del Estado y de las barreras al intercambio comercial para así quitar supuestos obstáculos a una auténtica economía mundial de mercado o “neoliberal”. En segundo lugar, una revolución en las comunicaciones globales que, vía los satélites, las computadoras y la Internet, permitieron el enlace rápido y permanente de instituciones e individuos de cualquier parte del planeta con sus contrapartes de cualquier otra y, por tanto, una mayor rapidez en las transacciones de bienes y el intercambio de información económica y política. Los movimientos de capitales —en especial los especulativos— adquirieron un carácter instantáneo. El tiempo y la distancia dejaron de ser factores importantes en el proceso productivo global.<sup>4</sup>

En 1980, la Unión Soviética invadió Afganistán en un esfuerzo por asegurar la existencia de un régimen manejable en esa parte de su frontera. Sin embargo, la situación evolucionó rápidamente en sentido contrario y los soviéticos pronto tuvieron en ese país pobre, aislado y montañoso, el equivalente a lo que Estados Unidos había tenido años atrás en Vietnam: una guerra de guerrillas, donde alentados por un notable fervor religioso, los insurgentes contaron con el apoyo externo estadounidense y de los países islámicos, y mostraron un feroz sentido de independencia. Así, en 1989 la Unión Soviética se vio obligada a abandonar Afganistán sin haber logrado su objetivo inicial y experimentar, en cambio, una humillante derrota política y militar. Arruinado, Afganistán quedó en manos de facciones de origen tribal —los mujahidín—, en conflicto entre ellas mismas. De esa guerra civil saldría triunfante un grupo islámico fundamentalista —los talibán— que no sólo aseguró la derrota irreversible de los intereses soviéticos primero

y rusos después, sino que introdujo un elemento adicional de inestabilidad en el ámbito regional y finalmente global, que en pocos años empezó a afectar seriamente, por la vía del terrorismo, los intereses de sus antiguos aliados: los regímenes conservadores del mundo árabe y Estados Unidos. Para entonces, en Irán, donde el gobierno pro occidental del sha Muhammad Reza Pahlevi había sido derrocado en 1979 por un movimiento popular de carácter religioso —en este caso chiíta—, el fundamentalismo de los ayatolas ya había chocado también con Estados Unidos, como luego lo haría el régimen autoritario de Irak.<sup>5</sup>

Para los años ochenta, Washington también había decidido intervenir activamente en Centroamérica. La razón inicial de esta política fue el triunfo en Nicaragua, en 1979, de un movimiento insurgente, nacionalista y con tendencias de izquierda: la revolución sandinista, que en su proceso de radicalización logró el apoyo de Cuba y la Unión Soviética, y justamente por ello se ganó la oposición implacable de Estados Unidos y de los gobiernos conservadores de Guatemala, El Salvador y Honduras que, a su vez, combatían movimientos insurgentes propios.

La transformación de Centroamérica en un teatro de lucha indirecta entre Washington y Moscú representó un problema para la seguridad de México, y su intento de mediar en esos conflictos, directamente primero y después junto con otros países latinoamericanos, tuvo un éxito muy relativo, pues su posición entró en conflicto directo con la de Estados Unidos, cuyos intereses prevalecieron finalmente.<sup>6</sup>

Sin duda alguna, la serie de eventos políticos internacionales más importantes en los últimos años del siglo pasado ocurrieron en 1989, y fueron, en primer lugar, la destrucción del muro que dividía Berlín y la caída en dominó de los gobiernos pro soviéticos de Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumania y Alemania Oriental. La destrucción de ese símbolo de la guerra fría que fue el Muro de Berlín y los cambios políticos de la Europa del este estuvieron precedidos por el gran cambio que experimentó la Unión Soviética tras la muerte, en noviembre de 1982, del viejo y conservador secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), Leonid Brezhnev. Ese cambio en favor de un socialismo económicamente más eficiente y políticamente más flexible, fue encabezado a partir de 1985 por Mijail Gorbachov. La idea de este político comunista, más joven e innovador que sus antecesores, no era destruir el sistema edificado por Lenin, cuya economía daba claras señales de debilidad, sino reestructurarlo, transformándolo desde adentro mediante la modernización económica (perestroika) y la liberalización política (glasnost). Sin embargo, las fuerzas desatadas dentro de la Unión Soviética y a lo largo de toda la Europa oriental por ese objetivo tan ambicioso, escaparon pronto al control de los aparatos tradicionales y terminaron por producir lo que se llamó “la revolución de terciopelo”, es decir, la rápida pérdida de poder de los partidos comunistas y la independencia real de los miembros del bloque socialista justamente por haber dejado de ser socialista. Finalmente, en 1992 concluyó el drama con la implosión (desintegración o colapso interno) de la Unión Soviética y su posterior recomposición en la Federación Rusa (Rusia y diecinueve repúblicas más). Para entonces, el PCUS había perdido el poder y Gorbachov había sido desplazado por Boris Yeltsin, un comunista transformado en demócrata. En contraste, en 1989 la dirigencia del Partido Comunista Chino, confrontada con demandas de cambio, optó por reprimir duramente a la cabeza visible de esa demanda: los estudiantes, y así permaneció como la mayor estructura política socialista clásica, aunque cada vez más abierta al capitalismo y al intercambio económico con el exterior.<sup>7</sup>

Con la desaparición de la Unión Soviética y el fin de la guerra fría, Estados Unidos emergió como el centro indiscutible —la hiperpotencia— del sistema internacional, y el neoliberalismo y la globalización como las dos grandes fuerzas que le daban forma y sentido al final del siglo XX. El lado más positivo del cierre de ese siglo que había visto el surgimiento de los sistemas políticos más represivos y cerrados —los totalitarismos de derecha e izquierda, la Alemania de Hitler, la Unión Soviética de Stalin y la China de Mao Tse-tung— estaba en el avance de la democracia política, en la universalización de la exigencia del respeto a los derechos humanos, en el reconocimiento cada vez mayor a los derechos de las mujeres y las minorías, así como en la conciencia de la necesidad de tomar medidas a nivel del sistema internacional para combatir la pobreza extrema, detener el abuso en la explotación de los recursos naturales y revertir el deterioro ambiental. Igualmente importante fue que en 1992 Europa occidental, el lugar de origen de las dos grandes guerras mundiales, apresurara su marcha hacia la unificación económica y política mediante el Tratado de Maastricht; tal unificación y su apretado tejido de intereses hizo que el histórico y peligroso conflicto franco-alemán pareciera un hecho definitivamente superado.<sup>8</sup>

Desgraciadamente, el fin del siglo XX no se caracterizó sólo por cerrar el peligroso capítulo de la guerra fría, unificar a los antiguos rivales europeos, alentar el tránsito de totalitarismos, autoritarismos y dictaduras hacia sistemas más abiertos, plurales y legales, y un intenso intercambio comercial, financiero y de información. Esa etapa también engendró su propia serie de horrores. En 1990, en Kosovo, estallaron conflictos de origen étnico que dieron inicio a una nueva fase de lucha entre los seis territorios históricos que formaron la Federación Yugoslava al concluir la segunda guerra mundial. En poco tiempo, la lucha en los Balcanes se convirtió en el conflicto más sangriento y brutal experimentado por Europa desde el fin de la segunda guerra mundial. Sólo la enorme sangría y el desgaste entre los combatientes y una tardía intervención de la comunidad internacional, parecieron poner fin en 1999 a ese nuevo episodio de la añeja lucha entre las comunidades étnicas de la región; pero el cierre de las heridas se perfiló como una empresa de largo plazo, en el mejor de los casos. Sin embargo, el episodio más brutal quedó reservado al continente más pobre, el africano. En efecto, en 1994, conflictos tribales cuyas raíces se encuentran en la nada ilustrada política colonial de Bélgica, desembocaron en un choque entre las etnias tutsi y hutu de Ruanda, que condujo al asesinato indiscriminado de medio millón de tutsis. Para entonces, las guerras civiles de Nigeria y Angola habían provocado la muerte de cientos de miles de civiles y, para coronar tan deprimente panorama, nuevas epidemias, como el sida, asolaban a tan lastimado continente, donde se presentaban los peores indicadores de desarrollo social.

En 1990, Estados Unidos encabezó una gran coalición internacional para revertir la invasión de Kuwait por el ejército de Irak, que había introducido un fuerte elemento desestabilizador en una región con alto valor estratégico por sus depósitos de petróleo. Sin embargo, ni la rápida y contundente victoria de Estados Unidos y sus aliados sobre Irak, en 1991, ni la firma de un acuerdo entre el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina y el primer ministro de Israel en 1994, bastaron para reintroducir la estabilidad en el mundo árabe. La incompatibilidad entre los proyectos nacionales de palestinos e israelíes simplemente no pudo ser superada, a pesar de conferencias y acuerdos patrocinados por la comunidad internacional —como el acuerdo de Oslo—, que permitieron que en 1997 la autoridad palestina se hiciera cargo de ciertos aspectos administrativos de los territorios ocupados por Israel. Se suponía que



ése sería el primer paso en la construcción de un verdadero Estado palestino. Pero el siglo se cerró sin nuevos avances en el proceso de institucionalizar la convivencia pacífica entre Israel por un lado y los palestinos y el resto de las naciones árabes por el otro. Es más, la permanencia del conflicto entre Israel y la comunidad palestina se esgrimió como un motivo central por parte de grupos islámicos muy radicales, que habían hecho de Afganistán y Somalia —dos estados particularmente pobres— sendas bases de una organización internacional que se propuso llevar a cabo operaciones terroristas contra blancos estadounidenses, ya que consideraron que Estados Unidos era el principal apoyo internacional no sólo de Israel sino de un buen número de elites corruptas del mundo islámico. Fue así como, para el año 2000, el terrorismo se perfilaba en el horizonte como uno de los principales desafíos al orden mundial.

El fin del segundo milenio de nuestra era encontró al sistema internacional, y por tanto a México, con una sola potencia global, e inmerso en un proceso acelerado de cambio tecnológico que aparecía a su vez como raíz y razón de la globalización, es decir, del flujo casi libre de mercancías y capitales, aunque no de mano de obra, lo cual no impedía la migración ilegal y masiva de los países pobres a los ricos, que se convirtió en otra característica de la nueva época. Si bien la creación global de riqueza material adquirió proporciones nunca experimentadas en la historia mundial, su mala distribución persistió e hizo mayor la distancia entre países ricos y pobres. A su vez, en muchos países aumentó también la distancia social entre regiones y clases, de manera que la pobreza y la marginalidad como obstáculos del desarrollo y la gobernabilidad, nacional e internacional, ocuparon el centro de la preocupación de quienes oteaban el futuro y sus problemas. Es verdad que para entonces el fantasma de una guerra atómica total se había desvanecido, pero en su lugar había llegado la amenaza del terrorismo, de intensos conflictos regionales o guerras civiles (alimentados por diferencias no sólo de clase sino étnicas y religiosas y por sentimientos nacionalistas), y del deterioro general del ambiente. En suma, al concluir el periodo que se estudia en esta obra, los retos globales eran diferentes de los de 1968, pero no por ello menos complejos o peligrosos.

### **El México del neopopulismo y la crisis estructural**

Al iniciarse el régimen político mexicano del siglo XX, la legitimidad del sistema de autoridad residió en el triunfo revolucionario y en la aceptación, explícita o tácita, por parte de la mayoría de la población del proyecto de país de las nuevas elites: un México más justo, integrado, democrático, independiente y nacionalista, enmarcado por un verdadero estado de derecho. Al menos eso era lo que implicaba la Constitución de 1917. Sin embargo, casi desde el inicio, el diseño democrático del nuevo régimen empezó a fallar, pues aunque desde el último levantamiento armado exitoso —la rebelión de Aguaprieta en 1920— las elecciones se efectuaron de acuerdo con el calendario establecido por la Constitución, nunca tuvieron el significado sustantivo que suponía el marco democrático: permitir que los ciudadanos eligieran efectivamente a sus gobernantes entre una pluralidad de organizaciones y programas partidarios. En la práctica, el derecho a ejercer el poder nunca se dejó al azar del voto; la competencia real no tuvo lugar entre la Revolución y sus adversarios —sobre todo después de la derrota de la rebelión de los cristeros en 1929—, sino exclusivamente entre las facciones de la elite revolucionaria. Por ello, los opositores más importantes no fueron ni de derecha ni contrarrevolucionarios, sino

desprendimientos del gran tronco revolucionario: los vasconcelistas en 1929, los almanistas en 1940, los padillistas en 1946 y los henriquistas en 1952. Sin embargo, los resultados electorales oficiales favorecieron sistemáticamente a quienes permanecieron en el partido hegemónico y, dentro de éste, a quienes contaron con el apoyo del general Plutarco Elías Calles hasta 1935 y del presidente en turno a partir de entonces, pues la maquinaria del partido y del gobierno se volcaba de manera irrestricta en su favor. El México de ciudadanos existió, pero no fue dominante y se vio obligado a actuar siempre dentro de un marco muy estrecho, constreñido por fuerzas y actores que correspondían a un México más tradicional o profundo: el de los grupos económicos, las corporaciones, los cacicazgos y el clientelismo. En el sistema creado por la Revolución, el estado de derecho permaneció como un mero proyecto, sin posibilidad de concretarse mientras no mudara la naturaleza misma del sistema. Con el fin del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas (1940) también perdieron ímpetu los grandes cambios en la estructura social forzados por la acción política de los líderes revolucionarios: reforma agraria, organización de los trabajadores, nacionalización de sectores clave de la economía, etcétera. Del cambio revolucionario se pasó entonces a privilegiar la estabilidad, y la transformación de la estructura social tuvo un ritmo lento, impulsada ya no por la fuerza de la política sino por el cambio económico, de manera que las estructuras sociales tendieron a coagularse.

Si las elecciones y la aplicación satisfactoria del marco jurídico no se convirtieron en fuentes reales de legitimidad del régimen posrevolucionario, ¿cuál fue la base de la notable estabilidad de la época? ¿Cuál fue la fuente de la legitimidad una vez que la lucha revolucionaria dejó de ser “idea joven” y el proceso de cambio social asociado a esa revolución empezó a ser historia? En la etapa posrevolucionaria, que arrancó con la segunda guerra mundial, a la herencia de las reformas cardenistas se añadieron un innegable crecimiento de la economía basado en la sustitución de importaciones (el producto per cápita creció 6% anual, en promedio, entre 1950 y 1970) y una relativa efectividad de las políticas sociales de un Estado en expansión: educación, salud, construcción de infraestructura, subsidios al consumo y a la actividad de ciertos sectores, baja inflación, etcétera. Este conjunto de factores logró mantener un grado aceptable de apoyo al régimen entre el grueso de la población mexicana hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX.<sup>9</sup>

La crisis política de 1968 se dio en un contexto de expansión urbana, de ensanchamiento de las oportunidades como resultado del crecimiento económico. Y ese crecimiento relativamente alto, combinado con baja inflación —el llamado “desarrollo estabilizador”—, se sostuvo hasta 1973. En algunos círculos internacionales se habló entonces del “milagro mexicano”. Sin embargo, a partir de entonces, los cambios desfavorables en el contexto económico mundial, las fallas estructurales en el modelo de crecimiento (los sectores más dinámicos de la economía demandaban mayores importaciones de bienes de capital e intermedios, pero la política monetaria impidió generar las divisas para adquirirlos al impedirles ser competitivos en el ámbito internacional) y un sustantivo aumento del gasto gubernamental (para neutralizar la crítica a la estructura de poder después de los sucesos del 68) hicieron que se saliera de control una inflación que hasta 1972 se había mantenido por abajo de 5% anual. Se perdió entonces, y de manera definitiva, el elemento estabilizador del desarrollo; además, el déficit y la deuda externa empezaron a crecer a un ritmo peligroso y finalmente estalló la crisis económica.

Tras el 68 y su repetición en 1971, los opositores más radicales optaron por la lucha ar-

mada y una radicalización hacia la izquierda en su marco ideológico. Por ello, para 1976, el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) se encontró con una "guerra sucia" en sus manos, con una mala relación con los empresarios, disgustados por el lenguaje populista del gobierno y su ineficacia como conductor de la economía, y con un déficit insostenible en la balanza de pagos. Así, en septiembre de ese año, el gobierno se vio obligado a llevar a cabo una devaluación de 40% del peso en su relación con el dólar y a aceptar las condiciones de los organismos financieros internacionales (donde el predominio de las decisiones estadounidenses era el factor decisivo) a los que acudió en busca de ayuda para no caer en una moratoria que complicara más la situación del país.

Con la crisis de 1976 se fue por la borda la política económica seguida desde mediados del siglo, en la que el gasto público era el motor del crecimiento. Igualmente, pareció enterrarse la idea de hacer de México un país líder del "tercer mundo", como lo había pretendido el presidente Echeverría, viajero incansable, crítico un tanto confuso del "imperialismo" a lo largo de todo su sexenio y autor de la iniciativa de la *Carta de derechos y deberes económicos de los Estados* adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas contra la voluntad de los países más desarrollados.

En 1976 pareció terminar una estrategia económica y un estilo de hacer política, para dar paso a otros que pondrían un perfil menor en el exterior y un papel igualmente menor del gasto público y del protagonismo presidencial, de acuerdo con el neoliberalismo que empezaba a imponerse como alternativa en el sistema mundial. Sin embargo, la combinación de un sorprendente aumento del precio del petróleo en el mercado mundial (que saltó de 14.30 dólares el barril en 1979 a 33.60 dólares en 1981) y el anuncio del descubrimiento de nuevas y grandes reservas de hidrocarburos en el sureste mexicano, hizo que el gobierno presidido por el antiguo secretario de Hacienda, el abogado José López Portillo (1976-1982), perdiera su prudencia inicial y volviera a las políticas del pasado inmediato, de gran déficit fiscal, rápido endeudamiento externo, rechazo al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y, con ello, a la posibilidad de abrir la economía mexicana. Por otro lado, reapareció también el activismo internacional: López Portillo apoyó a la triunfante revolución sandinista de Nicaragua e inició una agresiva mediación en los varios conflictos centroamericanos; subrayó la buena relación con Cuba; patrocinó una cumbre mundial Norte-Sur en Cancún; no desaprovechó las oportunidades para hacer notar su distancia frente a Estados Unidos, y usó el petróleo como un instrumento para ganar influencia en el Caribe y Centroamérica.

Por un breve e intenso periodo, la "abundancia petrolera", es decir, la disponibilidad de un recurso a la vez económico y estratégico, hizo que el gobierno considerara que en los años por venir su tarea central sería "administrar la abundancia"; por primera vez en la historia del México independiente, se dijo, la escasez de capital no sería un obstáculo para el desarrollo. Desdichadamente, en 1981 ocurrió lo que no se había previsto: el aumento en la producción petrolera mundial y las políticas de ahorro de energéticos de los grandes países consumidores hicieron bajar drásticamente los precios del crudo. La fuga de capitales de México no se hizo esperar y fue imposible evitar la nueva devaluación y su infaltable acompañante: la inflación, que se disparó hasta llegar a 100 por ciento. La nueva situación dejó a México con una enorme deuda externa que, entre 1972 y 1982, creció de 20 mil a 90 mil millones de dólares, y sin recursos para hacer frente a los compromisos externos inmediatos, equivalentes a pagos por más de

15 mil millones de dólares anuales. El gobierno buscó un chivo expiatorio y lo encontró en el sistema bancario, es decir, en el intermediario que facilitó la fuga masiva de divisas pero que no fue la causa primaria del fenómeno. La defensa de los inculcados ante la opinión pública fue inútil y el gobierno procedió a nacionalizar la banca, acción que no sirvió para aminorar los daños pero exacerbó las tensiones internas. De nuevo, México tuvo que acudir al gobierno de Washington y a los organismos financieros en busca de ayuda y respaldo político para renegociar los términos de la deuda externa e impedir el incumplimiento de las obligaciones contraídas con los acreedores internacionales. La supuesta “administración de la abundancia” terminó en un auténtico desastre, en un salto hacia atrás.

#### • **Fin de un modelo económico, efectos sociales y aceleración de ritmo del cambio político**

La de 1982 fue la segunda crisis económica en seis años y significó, entre otras muchas cosas, una nueva e importante merma de la legitimidad del régimen político, pues la capacidad de gestión de la clase gobernante en su conjunto había quedado desacreditada. El grupo político que encabezado por Miguel de la Madrid (1982-1988) se hizo cargo ya no de administrar la abundancia sino de capear una crisis económica estructural de grandes proporciones, se encontró muy pronto con las consecuencias políticas de la disminución en sus reservas de legitimidad. En efecto, para 1983, en Chihuahua, una clase media empresarial resentida por los daños que le había causado la política económica elaborada en “Los Pinos”, había logrado hacerse del control de la “oposición leal”, es decir del partido de oposición de derecha, el Partido Acción Nacional (PAN), que desde su creación en 1939 no había podido superar su situación marginal. Los empresarios “neopanistas” le dieron a esa vieja oposición un inesperado impulso en un estado fronterizo donde todas las clases sociales habían resentido de inmediato y a fondo los efectos negativos de una devaluación de 153% en 1982 y de 141% en 1983. En las elecciones municipales de ese año, el PAN o, más exactamente, el neopanismo, derrotó de manera inesperada al partido hegemónico en las principales ciudades de Chihuahua. Las reverberaciones de ese hecho se sintieron en todo el sistema político. Cuando los chihuahuenses volvieron a las urnas, en 1986, el PRI tenía ya preparados todos los instrumentos propios del partido de Estado que era, e impuso a su candidato como gobernador. Pero si bien volvió a vencer, de ninguna manera llegó a convencer. El fraude electoral de 1986, en Chihuahua, recibió amplia cobertura nacional e internacional, y el ritmo en la pérdida de legitimidad del sistema posrevolucionario avanzó a un paso acelerado.<sup>10</sup> A diferencia de 1968, esta vez no lo desafiaban la juventud estudiantil y la izquierda, sino una parte de la clase empresarial desde posiciones de derecha que tenían amplio respaldo en el sistema internacional. Un poco más adelante, en las elecciones presidenciales de 1988, se haría evidente en toda su magnitud la naturaleza del desgaste del régimen.

En un principio, la respuesta del gobierno de De la Madrid a la crisis económica y política fue titubeante, pero ya para 1985 quedó claro que se iba a usar el control presidencial sobre el viejo aparato corporativo para empezar a imponer un cambio estructural en el modelo económico que, inevitablemente y a la larga, tendría repercusiones negativas sobre esa misma estructura corporativa: la debilitaría, pues los costos de la crisis y del cambio se iban a cargar sobre los hombros de los asalariados y de los sectores populares en general. Y difícilmente hubiera podido ser de otra manera, pues las autoridades no tenían opciones. Así, en 1986 México entró

finalmente al GATT y empezó a dismantelar rápidamente las barreras proteccionistas y a alentar lo que llamó la "reconversión industrial" que, se suponía, tenía como meta hacer de México un país realmente exportador mediante el aliento a la inversión extranjera y el aprovechamiento de su mano de obra barata y de su vecindad con Estados Unidos. Desde luego que esta política implicaba abandonar a su suerte todas las actividades que no pudieran hacer frente a la competencia externa. Pese a lo anterior, la inflación no bajó con la velocidad deseada y en 1987 alcanzó 120%, mientras los aumentos salariales quedaron muy rezagados: en 1988 el salario real era 40% menor que en 1980. La pequeña y mediana industrias, que eran las más importantes generadoras de empleo, se vieron severamente golpeadas por la competencia con manufacturas baratas del extranjero, e incluso algunas de las grandes empresas tampoco sobrevivieron; ramas enteras de la producción destinada al mercado interno casi desaparecieron, y la economía informal aumentó a tal grado que, en 2000, sólo 35% de la fuerza de trabajo estaba empleada por el sector moderno de la economía. Con el tiempo, la reconversión fue un hecho irreversible. El déficit fiscal, que dio un salto gigantesco al pasar de 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 1971 a 16.9% en 1982, empezó a descender a marchas forzadas, aunque con un considerable costo social. Todo lo anterior tuvo una traducción social y, finalmente, política y la estructura de poder la resintió por entero.

Entre 1970 y 2000, la población mexicana se duplicó (de 48.2 millones a 97.4 millones). En la primera de las fechas citadas, la tasa de crecimiento anual era la más alta de la historia mexicana, 3.4%, pero al concluir el siglo, las políticas de control de la natalidad y otros factores sociales la había hecho bajar a poco más de la mitad, 1.6%, y la esperanza de vida había aumentado de 62 a 74 años. Los cálculos demográficos permitían suponer que la población dejaría de crecer hacia mediados del siglo XXI. La pirámide de edades de la población mexicana mostraba las características de un país de jóvenes, aunque cada vez menos, pues si en 1970 la proporción de mexicanos menores de 15 años era de 46%, al cierre del periodo había descendido a 34%. Se trataba de una población menos joven pero más educada; la tasa de analfabetismo había descendido de 33% en 1970 a 10% en 2000, cuando 92.2% de los niños de entre 6 y 14 años asistía a la escuela, sin embargo sólo 9 millones de mexicanos mayores de 14 años contaban con una educación formal superior al nivel de secundaria.

Desde el inicio de su historia hasta bien entrado el siglo XX, México fue predominantemente rural, pero en 1960 perdió esa característica y, para 1970, 57.8% de su población estaba clasificada como urbana. Al cerrarse el siglo, las tres cuartas partes de los mexicanos vivían en zonas consideradas urbanas. En 2000, 30% de la población residía en 2% del territorio nacional, es decir, en las zonas metropolitanas de la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Toluca.

A partir de 1982 y hasta el final del siglo, el crecimiento real de la economía resultó decepcionantemente bajo; en promedio, el PIB per cápita creció a una tasa del 0.1% anual, es decir, se estancó, y el salario mínimo en términos reales retrocedió en 33% entre 1990 y 2000. El modelo de crecimiento económico de la posrevolución y, sobre todo, la crisis de 1982 y sus efectos posteriores, dieron como resultado una distribución de la riqueza que se caracterizó por su injusticia. En efecto, para 1999 se calculó que del ingreso disponible, el 20% más pobre de la población mexicana recibió apenas 3.8%, en tanto que el 20% más afortunado acumuló 55.3%. Y dentro de este último sector, la distribución fue igualmente dispar. Dependiendo de la manera de

calcular, entre 40 y 60% de los mexicanos caían dentro de la clasificación de pobres. No cabe duda que, al final del siglo XX, disminuir la iniquidad de la estructura social constituía el reto más importante al que debía de hacer frente la clase dirigente mexicana.

La elección presidencial de 1988 enfrentó a un PRI encabezado por el joven y ambicioso tecnócrata Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto en el gobierno anterior, con una oposición alimentada por el descontento que generó la caída del nivel de vida tanto como de las expectativas. En el PAN, la candidatura fue ganada por un enérgico y muy irritado empresario agrícola de Sinaloa, Manuel Clouthier, que representaba justamente a los empresarios y a la clase media que ya no estaban dispuestos a delegar en la clase política priísta el manejo político del país y exigían el establecimiento de una democracia política real para lograr la representatividad e influencia en el aparato del Estado a las que consideraban tenían derecho. Sin embargo, el hecho más novedoso fue la división que se produjo en el seno mismo de la cúpula priísta. En efecto, en 1987 tuvo lugar el desprendimiento de un sector del PRI —el primero realmente importante desde la elección de 1952— abiertamente en pugna con la tecnocracia del grupo De la Madrid-Salinas y que se propuso dar forma a una oposición desde la izquierda. La quiebra de la cúpula priísta fue encabezada por el exgobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas, y por un expresidente del PRI, Porfirio Muñoz Ledo, quienes lograron dar forma a una muy heterogénea coalición de desplazados del partido del gobierno y miembros de la antigua izquierda, bajo la bandera del Frente Democrático Nacional (FDN), que postuló a Cárdenas como su candidato presidencial.

La noche del 6 de julio de 1988, el elaborado sistema de conteo de votos montado por la Secretaría de Gobernación sufrió una inexplicable “falla”, y los resultados finales tardaron varios días en darse. La sospecha de un fraude electoral resultó inevitable, sobre todo porque las cifras finales fueron las mínimas necesarias para dar la mayoría absoluta al candidato oficial: apenas 50.71%; al FDN se le reconoció sólo 30.59% y al PAN 16.79%. A contrapelo, el sistema autoritario mexicano había entrado en la era de elecciones con competencia, aunque aún tendrían que pasar doce años y muchos sucesos antes de que ingresara en la era de los resultados creíbles.<sup>11</sup>

### **La tecnocracia, última etapa del régimen posrevolucionario**

El sexenio presidido por Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) puede verse como el uso, a fondo, de los poderes del presidencialismo autoritario para recuperar legitimidad, acelerar los cambios económicos y rehacer la coalición gobernante, sin modificar de manera sustantiva las formas políticas de gobernar, es decir, sin cambiar la naturaleza íntima del sistema, su autoritarismo. Para usar los términos de Gorbachov en la Unión Soviética de ese momento, en México se trató de llevar a cabo una perestroika sin glasnost.

Para hacer expedito el cambio económico y rehacer la alianza política que sostenía al PRI, el gobierno procedió a llevar a cabo una serie de reformas de fondo a la Constitución. Se modificó el marco legal agrario, de manera que se puso punto final al reparto de la tierra y se permitió la privatización del ejido; la banca retornó a manos privadas, pero no a las de sus dueños originales sino a las de una nueva camada de banqueros, todos cercanos al grupo en el poder; lo mismo sucedió con otras empresas del Estado, notablemente la telefónica. Se dio reconoci-

miento formal a las iglesias, aunque la relación privilegiada se estableció entre el gobierno y la iglesia católica. Desde luego, el cambio estructural más notable, el que tuvo un impacto más profundo y duradero, fue el que resultó de la negociación de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. El Tratado de Libre Comercio de la América del Norte (TLCAN), que se firmó en 1993 y entró en vigor en 1994, fue visto, y con razón, como la mayor victoria política de Carlos Salinas y el punto culminante de la “revolución tecnocrática” de México. Los sectores estadounidenses opuestos al acuerdo eran fuertes, y el gobierno mexicano debió desplegar una intensa campaña de cabildeo para superar sus objeciones.

El intercambio comercial México-Estados Unidos (exportaciones más importaciones) creció de 60 mil millones de dólares en 1991 a más de 225 mil millones en 1999, y la inversión directa de ese país en México de 2 mil millones a 10 mil millones de dólares anuales en el mismo periodo. En realidad, para México el TLCAN fue, mucho más que un tratado de comercio, el inicio de un cambio de fondo en su relación histórica con el gran vecino del norte. El interés nacional mexicano dejó de ser definido en función del grado de independencia relativa frente a Estados Unidos para hacerlo en función de su cercanía e integración con ese país.<sup>12</sup>

Para dotar a su proyecto político de una base social de apoyo, real y sustantiva, el presidente Salinas decidió reforzar, y en cierto sentido sustituir, la relación del PRI con los sectores populares mediante el diseño y la puesta en marcha de una imaginativa política de cooptación masiva, por la presidencia, de la clientela que la izquierda le había arrebatado en 1988. En efecto, el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) anunciado desde el primer día del gobierno de Salinas, significó prácticamente la construcción de un partido político paralelo al PRI, encabezado por el presidente. Con recursos provenientes de la venta de empresas estatales, y equivalentes en promedio a 2 mil millones de dólares anuales, más la constitución de miles de comités de PRONASOL en todo el país, el salinismo logró consolidar en unos cuantos años una impresionante base popular. Mediante la consulta directa y la colaboración estrecha con los funcionarios del gobierno, esos comités de Solidaridad proponían acciones que beneficiaban directa e inmediatamente a las comunidades donde se encontraban los 17 millones de mexicanos que vivían en condiciones de pobreza extrema y que eran la clientela privilegiada del PRONASOL, aunque no la única. En una negociación directa entre los comités y el gobierno, se procedió a llevar a cabo miles de obras de introducción de agua potable, drenaje, alumbrado y pavimentación; a la construcción de viviendas, escuelas y clínicas; a la puesta en marcha de programas alimentarios o de becas, etcétera. En la práctica, la lógica del programa estuvo gobernada menos por el combate a las causas mismas de la pobreza y más por sus efectos visibles y, sobre todo, ligada a los resultados electorales. Y esa lógica dio resultados: en las elecciones de 1991 el PRI recuperó una buena parte del terreno electoral perdido tres años antes, al recibir 61.5% de los votos, y logró marginar a su verdadero adversario: la izquierda neocardenista, que agrupada en el recién formado Partido de la Revolución Democrática (PRD) consiguió apenas un magro 8.2% de los votos.

En 1991, el PAN, que para entonces había decidido negociar con el presidente y su proyecto, recuperó su lugar histórico como segunda fuerza electoral con 17.7% de votos. Y esa “vuelta a la normalidad” se debió en gran medida a que la directiva panista decidió aprovechar la relativa debilidad de Salinas en 1988 para darle su respaldo a cambio de políticas favorables a la economía de mercado, la privatización y el reconocimiento de los triunfos electorales panistas.

Así, el partido blanquiazul apoyó en el congreso los principales proyectos de ley del gobierno y a cambio le fueron reconocidas sus primeras victorias electorales en el ámbito estatal: Baja California, Chihuahua y Guanajuato, más un buen número de triunfos en el ámbito municipal y legislativo. Cuando en 1994 llegó el nuevo encuentro en las urnas, el PAN —esta vez encabezado por un panista tradicional, Diego Fernández de Cevallos— no pareció ya interesado en hacer un gran esfuerzo para derrotar a Ernesto Zedillo, sustituto del candidato largamente preparado por Salinas, Luis Donaldo Colosio, quien fue asesinado en marzo de 1994. El PRI se quedó con la presidencia por decimosegunda vez consecutiva, pero su margen de victoria disminuyó respecto del ya pequeño de seis años atrás. Zedillo fue proclamado presidente con 48.77% del total de votos emitidos, mientras que el candidato del PAN ocupó el segundo lugar con 25.94% y el PRD, de nuevo encabezado por Cárdenas, recibió sólo 18.47%, la mitad de lo que se le había reconocido en 1988.

Las elecciones de 1994 se dieron en un ambiente de competencia electoral real y en un marco legal donde los dados no estaban tan cargados en favor del partido oficial. En efecto, el Instituto Federal Electoral (IFE) ya no fue manejado por el aparato priista, como en el pasado, sino que en su estructura de autoridad se introdujo a un grupo de consejeros ciudadanos seleccionados por los partidos pero independientes de éstos y que reflejaban la creciente pluralidad política del país. Ahora bien, el grueso de la burocracia de esa institución electoral había sido reclutado desde antes y a la sombra del PRI, y siguió comportándose de acuerdo con su extracción. En cualquier caso, la magnitud de las irregularidades electorales fue menor que en el pasado. Otros dos acontecimientos habrían de marcar profundamente el proceso político de ese año: el ya mencionado asesinato del candidato oficial a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, y el igualmente sorpresivo levantamiento armado, el primero de enero, en Chiapas, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de extracción indígena. Que los combates entre los insurgentes, nunca numerosos ni bien armados, y el gobierno duraran sólo unos cuantos días para dar paso a un complejo y prolongado proceso de negociación, no impidió que quedara definitivamente dañada la imagen que el gobierno salinista había buscado construir dentro y fuera del país: la de un México unido en torno a sus gobernantes y listo para ser admitido en el selecto club de los países donde la modernidad ya había sentado sus reales.

Finalmente, 1994 concluyó con una nueva crisis económica; esta vez no se trató de un problema estructural, sino de las debilidades propias del proceso acelerado de cambio económico, que habían sido magnificadas por la necesidad política de presentar una economía pujante al momento de la elección presidencial en condiciones de incertidumbre (levantamiento indígena, asesinato del candidato oficial) y de fuerte oposición partidista. Por esas razones se pospuso una necesaria devaluación, a pesar de un déficit creciente en el intercambio de México con el exterior. Las dudas entre los inversionistas especulativos nacidas del cambio de equipo presidencial, más un pésimo manejo de la política cambiaria del nuevo gobierno, desembocaron en una nueva huida de capitales, en una devaluación mucho mayor que la planeada inicialmente, en una nueva solicitud de ayuda urgente al gobierno de Estados Unidos (ofreciendo como garantía el producto de las futuras exportaciones de petróleo) y en una caída de más de 6% del PIB en 1995. Al final, cuando el polvo se asentó (en un par de años la emergencia había quedado atrás), quedó en claro lo insatisfactorio de la gestión del gobierno, lo creciente del reclamo democrático y la persistencia y agudización de las divisiones sociales. Era evidente que Mé-



xico aún tenía mucho camino por andar antes de suponer que había ingresado realmente en la modernidad y superado las causas de su subdesarrollo.

### El cierre del ciclo histórico

El gobierno presidido por Ernesto Zedillo se caracterizó, entre otras cosas, por un rompimiento dentro del círculo tecnocrático que se había formado alrededor de Carlos Salinas, cuyo proyecto aparente había sido retener el control del gobierno y del Estado y la dirección del desarrollo durante varios sexenios. Por otro lado, Zedillo persistió en la política económica ya establecida que aumentó aún más la distancia entre los intereses que se beneficiaban de las reformas que seguían la lógica del neoliberalismo y los intereses del viejo aparato corporativo que era el alma del PRI: ejidos, sindicatos y organizaciones populares. La llamada entonces “sana distancia” entre el partido del Estado y el gobierno fue sólo otra forma de hacer referencia a una lenta pero clara ruptura entre el presidente y su partido. Sin embargo, Zedillo conservó hasta el final el poder suficiente para imponer los cambios que consideró necesarios en la dirigencia del PRI y hacer que el partido aceptara al candidato presidencial que él deseaba (el sinaloense Francisco Labastida), pero los cuadros priístas mostraron cada vez más su distancia y desconfianza frente a un presidente al que no veían como uno de los suyos.

La ruptura del grupo compacto que Carlos Salinas había formado desde los años ochenta se hizo evidente cuando el secretario de Hacienda de Salinas, Pedro Aspe, no fue confirmado en su cargo por el nuevo presidente, y se formalizó cuando éste endosó la factura de la crisis económica de diciembre de 1994 a los errores del gobierno de Salinas, para luego arrestar al hermano mayor del expresidente, Raúl Salinas, acusándolo de ser el autor intelectual del asesinato del secretario del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Esa acusación, hecha sin pruebas contundentes, llevó al descubrimiento de una fortuna de origen inexplicable en cuentas secretas de Raúl Salinas en bancos suizos. El descrédito del salinismo se vio coronado con el exilio voluntario del expresidente, que consideró prudente trasladar su residencia a Irlanda. El programa social más importante del salinismo, e inevitablemente ligado a la figura de su creador, el PRONASOL, desapareció para ser sustituido por otro con menor carga y eficacia políticas: el PROGRESA. La tensión entre el presidente Zedillo y el aparato priísta salió definitivamente a flote al inicio de 1995, cuando el gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, cuya elección había sido puesta en duda por la oposición, simplemente rechazó la sugerencia presidencial de dejar su cargo a cambio de un puesto en el gabinete. Pronto, otros gobernadores seguirían el ejemplo del hombre fuerte de Tabasco y dejarían de ser los subordinados incondicionales del presidente para empezar a crear bases locales de poder propio. Finalmente, en asamblea, los priístas impusieron tales prerrequisitos para ser candidato presidencial que cerraron la puerta a varios miembros del gabinete y limitaron el universo del cual podía Zedillo designar a su sucesor.

Para 1996, la economía empezó a recuperarse, pero no de una manera robusta. Desde hacía tiempo, las expectativas generadas por el discurso oficial correspondían muy poco a los resultados que se observaban desde el nivel del suelo social. Evidentemente, las fuentes históricas de la legitimidad del sistema político se habían secado, o estaban muy cerca de ello. Si a lo anterior se le agrega una mayor apertura de los medios de difusión; la impaciencia ciudadana

ante el crecimiento de los índices de delincuencia; la persistencia de la mala impartición de la justicia; la falta de solución al conflicto de Chiapas; la percepción de una impunidad institucional ante la corrupción pública y privada, y el rescate por 467 mil millones de pesos de una banca quebrada, sin investigar ni castigar los malos manejos de los banqueros al otorgar préstamos y autopréstamos, entonces no es difícil entender que el campo electoral de 2000 fuera tan poco propicio para el partido oficial.

Las reformas electorales de 1994 y 1996 dieron, por un lado, verdadera independencia al IFE y, por otro, pusieron prácticamente en pie de igualdad a la ciudad de México con el resto de las entidades federativas, pues por fin su jefe de gobierno pudo ser elegido en vez de ser designado por el presidente. En las elecciones federales de 1997, el PRI mantuvo la delantera pero con un estrecho margen. En efecto, con 39.9% del voto, el viejo partido del Estado perdió el control de la cámara de diputados por primera vez en su historia y, además, perdió el gobierno de la capital. El PAN recibió 27.2% del voto pero el PRD ascendió hasta casi igualarlo, con 26.3%; los partidos pequeños y marginales sumaron 6.5%. Hasta ese momento, el gobierno había mantenido el control de un proceso paulatino y contradictorio de liberalización política, pero a partir de entonces el partido del presidente perdió definitivamente el control del proceso electoral y el presidencialismo mexicano dejó de ser lo que había sido desde 1935. Así, concluyó la lenta liberalización política mexicana surgida de la necesidad de dar respuesta a la crisis de 1968 primero y a la de 1982 después, y se inició la parte sustantiva de la transición política.<sup>13</sup>

Tras asimilar los resultados de las elecciones de 1997, todos los actores políticos centraron su atención y energía en el 2000. La contienda presidencial de ese año se vislumbraba ya como un momento decisivo en el proceso de desarrollo político del país, pues por primera vez el régimen se iba a enfrentar a una oposición fuerte y en un marco electoral vigilado por un árbitro creíble, pues el IFE era cada vez más una estructura profesional e independiente. El presidente Zedillo, tras superar un desafío abierto dentro de las filas de su partido (pues otra vez el gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, se opuso al candidato del presidente y se presentó como el auténtico portaestandarte del priísmo), dispuso aún de los medios necesarios para imponer en las elecciones internas la candidatura de su secretario de Gobernación, Francisco Labastida. En el otro extremo del espectro, Cuauhtémoc Cárdenas logró ser designado por tercera vez el candidato de la izquierda (en una coalición encabezada por el PRD) y en el PAN el ganador no fue un cuadro tradicional, como seis años antes, sino un neopanista administrador de empresas, propietario agrícola, gobernador de Guanajuato (posición ganada sin el respaldo decidido de la cúpula panista): Vicente Fox, creador de un equipo propio y un tanto ajeno al PAN y poseedor de un discurso conservador pero con tintes populistas.<sup>14</sup>

Al inicio de 2000, el PAN y el PRD exploraron sin éxito la posibilidad de presentar un candidato único, de manera que sus diferencias quedaran temporalmente subordinadas a un objetivo común: derrotar al PRI, quebrar el espinazo del sistema autoritario y transitar a un sistema de democracia política efectiva. Perdida la posibilidad de esa alianza estratégica, cada uno de los tres grandes partidos se propuso ganar la presidencia, el PRI por sí solo y el PAN y el PRD en coalición con partidos pequeños, pues ahora sí, cada voto contaba. El 2 de julio de 2000, la base electoral permanente del PAN a la que se sumó el crucial "voto útil" convocado por el foxismo, hicieron posible que las urnas le dieran a Vicente Fox 42.52% de un voto muy vigilado de 37 millones 600 mil electores, dejando a Francisco Labastida con 36.1% y a Cuauhtémoc Cárdenas

con 16.64%. El resto de los candidatos registrados simplemente fue marginado por los electores. Ahora bien, Fox ganó la presidencia pero el congreso, convertido ya en un poder independiente, quedó sin mayoría absoluta. México entró a la democracia y al difícil proceso de construir un nuevo régimen con un gobierno dividido.

En julio de 2000, México experimentó el primer cambio ordenado y relativamente pacífico de régimen político en toda su historia como país independiente, aunque aún debía resolver el problema creado por los movimientos armados que anidaban en su seno: el EZLN y otros movimientos guerrilleros menores. En cualquier caso, fue al finalizar el siglo XX que los impulsos de la modernización política y económica de México coincidieron por fin y se encontraron para fundirse en un solo proceso. Sin embargo, superados los obstáculos para ingresar en la democracia, el nuevo desafío que enfrentaba México, como sociedad, era igualmente imponente: encontrar la forma de gobernar a pesar de que el presidente no contaba con mayoría en el congreso ni de los gobiernos estatales, crear o reconstituir casi todas las instituciones para hacer de ellas las propias de un verdadero estado de derecho, recuperar y sostener un ritmo de crecimiento económico aceptable tras casi dos décadas de virtual estancamiento, diseñar y poner en marcha una serie de políticas sociales que disminuyeran efectivamente las grandes y crecientes distancias entre las clases sociales y las regiones, encontrar el sustituto adecuado al nacionalismo revolucionario como núcleo de un proyecto nacional adecuado a la etapa de la globalización, donde un complejo proceso de integración con el poderoso vecino del norte, por la vía del TLCAN, marcaba el ritmo de muchas de las variables centrales del desarrollo.

Tras examinar los diferentes volúmenes que componen esta serie, el lector comprenderá que al concluir el ciclo abierto por la Revolución mexicana, el desafío para los mexicanos no era menor en ningún aspecto del que enfrentaron las generaciones anteriores. Sólo queda esperar que la mayor conciencia sobre lo conseguido hasta ese momento, así como de la magnitud de las tareas y los problemas que se tenían de cara al futuro, le permitieran a esa y a las generaciones para las que está pensada esta obra, contar con mejores herramientas intelectuales para superar el reto histórico que significaba ponerse a tono, finalmente, con la modernidad, la justicia y la solidaridad.